

Alerta roja

Nicolás Lynch

La lucha anti-corrupción parece haber sufrido más de un serio traspies en los últimos días. A la campaña contra el ex procurador José Ugaz se suman los obstáculos que se ponen a la misma en el seno del Congreso. ¿Quiénes están metidos en este asunto? Pues da la impresión que gente de todos los grupos políticos. A Ugaz ya no sólo lo ataca la mafia sino también sectores importantes del gobierno. En el Congreso parece ser que es el Partido Aprista quien está detrás de limitar las funciones de la comisión que debe investigar a la mafia de Fujimori y Montesinos, sin embargo, éste cometido lo estaría logrando, según declaraciones de diversos congresistas, con el acuerdo de la Presidencia del Congreso y dicen que hasta del propio Presidente de la República.

¿Será todo esto cierto? ¿Habremos llegado al punto en el que los propios demócratas quieren desprestigiar la lucha anti-corrupción? De ser así esto sería gravísimo. La lucha anti-corrupción ha sido un componente central de la transición democrática. La dictadura se cayó justamente porque estaba podrida y una de las aspiraciones centrales de la ciudadanía era que se procediera a una limpieza a fondo. Si hoy, de una u otra manera, se ponen cortapisas a la lucha anti-corrupción, la democracia se estaría suicidando y dándole en la yema del gusto a la mafia que no quiere otra cosa que el desprestigio de esta lucha por la propia democracia.

Seguramente que existen problemas en este difícilísimo proceso para descubrir las porquerías del régimen autoritario. Es más, cosas como aquella equívoca lista que se repartió en el evento de Pro-ética donde señalaban las denuncias de corrupción ocurridas durante este gobierno que habían aparecido en algunos medios sin aclarar que se trataba nada más que de denuncias y no de hechos debidamente probados o en proceso de investigación, deben de haber irritado a más de una importante autoridad gubernamental. Pero incidentes al fin y al cabo secundarios no pueden llevar a los actores políticos del gobierno y/o de la oposición a tomar acciones que los hacen aparecer como debilitando el esfuerzo anti-corrupción.

Una de las dificultades mayores de esta transición democrática ha sido encontrar un liderazgo político para llevar adelante la lucha anti-corrupción. Algunos ven esto como un asunto de los procuradores, o del Ministro de Justicia o del Poder Judicial, nada más falso. La lucha anti-corrupción no es un tema de política sectorial, ni siquiera, me atrevería decir de política gubernamental, es el típico tema de política de Estado. Presupone en buena medida incluso al desarrollo de las instituciones democráticas. No se puede levantar el edificio de la democracia en un terreno minado por la corrupción.

Hay necesidad, por ello, de poner a funcionar el Acuerdo Nacional que señala las líneas de trabajo respectivas, para, en ese ámbito, desarrollar en conjunto, partidos y organizaciones de la sociedad civil, un gran esfuerzo anti-corrupción. Esta lucha no puede conocer fronteras institucionales o partidarias, es una lucha de todos los peruanos, es más, es una lucha de cuyo éxito depende el futuro de todos los peruanos.

¿Tiene sentido, en esta situación y con estas urgencias caer en pequeñeces y desarrollar campañas de desprestigio contra quienes están o han estado en la primera fila de combate contra la mafia? Tiene sentido para quien tiene rabo de paja y teme que lo

toquen, pero carece absolutamente de sentido para la abrumadora mayoría de los peruanos que quieren un país limpio y que merezca el nombre de tal.